

Aumenta drama en Sumapaz

La política de "Seguridad Democrática", no ha mostrado éxitos reales contra la insurgencia, pero si ha incrementado la violación a los derechos humanos de los colombianos. La región de Sumapaz, sólo una muestra

El auditorio de la Asociación Distrital de Educadores, ADE sur, en Bogotá, sirvió como escenario para que alrededor de 500 personas de organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes de organizaciones sociales, estudiantes y habitantes de la localidad de Sumapaz, realizaran el Foro Regional del Sumapaz, *Por la Vida, las Libertades Públicas y*

los Derechos Humanos, el pasado 27 de mayo.

Los convocantes

El evento fue convocado por la Federación Nacional Sindical Agropecuaria, Fensuagro, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, la CUT Bogotá y Cundinamarca, la Asociación Distrital de Educadores, ADE, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, el Partido Comunista, la Unión Patriótica, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación de Juntas Comunales del Sumapaz y el Frente Social y Político. Según sus organizadores el acto generó un espacio de encuentro entre la comunidad y sus organizaciones sociales con las autoridades del Distrito para analizar la situación de derechos humanos y buscar compromisos por parte de las autoridades competentes. Las denuncias de la comunidad giraron alrededor de la persecución contra los campesinos, evidente en el acoso, la estigmatización, el despojo de sus propiedades y los asesinatos, como ocurrió recientemente cuando

tres jóvenes fueron ejecutados por el Ejército y fueron reportados como guerrilleros.

En la ponencia del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Sumapaz, se denunció la persecución con detenciones y señalamiento a líderes políticos y sociales por parte del Ejército y la Fiscalía. En octubre de 2002, los dirigentes Gerardo Gonzáles y Antonio Guerrero entre otros, fueron declarados objetivos militares de la "AUC", obligándolos a desplazarse y a la salida del país a uno de ellos. Así mismo, se aseguró que la población de esta región ha sido concentrada en un proceso de resistencia al fenómeno del señalamiento, persecución sistemática, allanamiento, amedrantamiento, detenciones arbitrarias e injustas judicializaciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado. Además, las organizaciones sociales de la región manifestaron que se viene generando una política de desplazamiento poblacional para dar vía libre al mercado del agua y la biodiversidad, abundante en este territorio.

Entre los hechos más destacados denunciados en la ponencia

central están: La ejecución extrajudicial de dos miembros de una misma familia en el año 2000, la ejecución del joven Jorge Tamayo, el asesinato de dos campesinos -padre e hijo- con tiros de fusil en la vereda Santa Rosa y en el año 2004 la detención masiva de campesinos, entre otros. Las amenazas más comunes, son por parte del Ejército, que asegura tener una lista de personas, que según los soldados torturarán. Todas estas arbitrariedades se sustentan en informes de "inteligencia militar", del Comando Operativo de Acción Integral número XIII del Sumapaz. En consecuencia, también se encuentran detenidos una serie de campesinos y campesinas, comerciantes y agricultores, todos nacidos y conocidos en la región por parte de las autoridades y los pobladores.

El caso más reciente

El 20 de marzo, fueron torturados, asesinados y registrados ante los medios de comunicación como guerrilleros dados de baja en combate por parte del Ejército, tres jóvenes campesinos, agricultores y destacados deportistas de la región, habitantes de la vereda El Capitolio. Uno de ellos padre de tres hijos, había trabajado como ayudante de maquinaria de la alcaldía local del Sumapaz.

Por otra parte, el acantonamiento de las tropas del Ejército en las cabeceras de los acueductos, provoca la contaminación de los nacimientos de

agua, pues los soldados utilizan los tanques y cámaras de las redes de acueducto para el aseo personal y el lavado de ropa. Además, la gran cantidad de desechos no biodegradables que dejan en el parque natural, contaminan uno de los páramos y riquezas naturales más grandes del mundo. Antecesa situación se ha pedido la intervención de Parques Nacionales por parte de la alcaldía local.

Compromisos reales

Uno de los asistentes al evento fue el Representante a la Cámara Wilson Borja, quien habló con VOZ y ratificó su compromiso de seguir trabajando desde el Congreso por la Ley de Páramos para que no se presente en esta región una privatización de las aguas; seguir denunciando el atropello de los militares y buscar que no queden asesinatos impunes, cometidos posiblemente por los militares -como el de los tres jóvenes-, puesto que en esta zona hace más de un año no se presentan combates con la guerrilla.

Así mismo, Jairo Ramírez, del CPDH, afirmó que se debe exigir a la Fiscalía la investigación de los crímenes cometidos en la zona; buscar mecanismos de protección al ecosistema afectado por la presencia del Batallón de Alta Montaña y hacer que el Estado asuma la responsabilidad en el desarrollo de una política que mejore el bienestar de la población del Sumapaz. ★